

## II

### INSERCIÓN

Entregada por el señor senador Romero Feris

Señor presidente:

El proyecto que hoy analizamos tiende a perfeccionar el sistema establecido por la ley 19.134 con las reformas incorporadas por las leyes 23.264 y 23.515. Elimina o disminuye impedimentos y restricciones en lo que hace a la posibilidad de adoptar y de ser adoptado y agiliza los trámites que ubica, exclusivamente, en sede judicial.

Vengo pues, a expresar mi apoyo en general al meditado dictamen de la Comisión de Legislación General y Familia y Minoridad al que propongo sólo cambios puntuales que más adelante referiré.

La adopción, como es sabido, no fue tratada por Vélez Sarsfield. Este tuvo la vivencia del desuso que se había operado tanto en España —donde fue regulada en forma sumaria por las partidas— como en Francia, donde había sido contemplada por el Código Napoleón que estableció, desde el punto de vista económico, un vínculo mucho más débil que la filiación de sangre. La visión antigua parecía dirigida a posibilitar la adopción de hijos que en realidad eran propios. Con el tiempo, la institución se abrió camino lentamente, pero con certeza en nuestra sociedad, persiguiendo una doble finalidad que

merece todo el apoyo de las instituciones: dar hijos a quien no los tiene por naturaleza y dar padres a quienes le faltan.

Esta falta puede deberse a causas naturales, como la muerte, a causas psicológicas de los progenitores que optan por el abandono o a causas socioeconómicas, siempre complejas, que llevan a los padres a desentenderse de la atención y educación de los hijos.

Pero el nuevo criterio de la adopción no sólo implica la protección a los menores abandonados o sin padres, sino la existencia de tres sujetos y esto está contemplado con precisión por la ley: el menor adoptado cuyo interés es prevalente, los padres biológicos y los padres adoptivos. Los tres intereses deben ser correlacionados y garantizados. También la celeridad en la culminación de los procesos y la posibilidad de que la paternidad por opción sea asumida por hombres y mujeres en la plenitud de su vitalidad. Las relaciones que hacen a la adopción se han modificado a medida que va evolucionando la conciencia sobre el valor supremo de la vida humana y se hacen más complejas las relaciones entre padres e hijos. Por tanto estimo conveniente esta actualización de una ley, que en

su momento significó un paso de importancia para la creación de nuevos vínculos, dado que el sistema anterior de 1948 (ley 13.252), no contemplaba la adopción plena, que hoy constituye el núcleo de la institución.

A esto tiende la disminución de la edad requerida en los adoptantes, que es una constante en las diversas leyes sancionadas en nuestro país y también en el derecho comparado y que el proyecto fija en treinta años, pudiendo disminuir dicha edad si se acredita la imposibilidad de tener descendencia (artículo 6º), o si los cónyuges tienen más de tres años de casados.

Considero acertado que el proyecto disponga que si se adoptase a varios menores todas las adopciones sean del mismo tipo.

Esto tiende a subrayar el principio de igualdad y no discriminación, que constituye uno de los pilares de nuestro sistema jurídico y que ha sido subrayada por los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a nuestra Constitución. La ley subraya así la esencial igualdad entre los hijos.

Constituye también un resguardo sustancial que se prevea que para ser adoptante es necesario acreditar de manera fehaciente e indubitable residencia permanente en el país por un período mínimo de cinco años.

Lamentablemente existen intereses oscuros que tratan de crear un comercio infame alrededor de la adopción. La crónica diaria ha señalado algunos casos, que si bien aislados, deben ser advertidos por la ley. Ellos castigan las regiones más pobres. Es así como nuestro país, al ratificar la Convención de los Derechos del Niño, hizo expresa reserva de que ello no implicaba la vigencia de las disposiciones de ese tratado referentes a la adopción internacional, dado que no existía aún "un riguroso mecanismo de protección legal del niño en esta materia" que impidiera su tráfico y venta.

Señaló entonces, el gobierno nacional, el déficit de la ley internacional en referencia a la protección prevista en el derecho interno. La norma que requiere la residencia fehaciente e indubitable, debe pues merecer todo nuestro apoyo.

El artículo 5º dispone la creación de un registro único de aspirantes a la adopción. La previsión es útil pues tiende a centralizar y unificar todas las solicitudes que se hagan en el territorio de la República. No obstante consideramos que no es conveniente que sea respetado indefectiblemente el orden cronológico de la inscripción, dado que —como expusimos— debe tenerse en cuenta el interés correlacionado de los menores y de los adoptantes y por tanto a cada niño le deben corresponder los mejores padres posibles.

Y eso no se consigue con meros criterios cronológicos, sino con la atención de las características particulares de los adoptantes y del menor. La ley debería consignar que el registro actuara bajo la dependencia del Ministerio Público de Menores. En forma correlativa consideramos que si bien es aceptable el criterio general de que puede ser adoptante toda persona que reúna los requisitos establecidos por la ley cualquiera fuese su estado civil (artículo 6º), la forma debe disponer en forma expresa que tendrán preferencia para el otorgamiento de la adopción las parejas que hayan contraído matrimonio.

Este hecho y el haber fijado un compromiso de recíprocas obligaciones y derechos entre hombre y mujer, da mejor garantía el menor que ha de convivir con ellos. No existe en esto lesión al principio de igualdad ni forma alguna de discriminación. La igualdad constitucional en sustancia consiste en dar igual tratamiento a quienes están en las mismas condiciones. El artículo 12 prevé que el juez deberá valorar "los medios de vida y cualidades morales y personales del o de los adoptantes".

Debería, reitero, incluirse la preferencia por aquellas parejas que han contraído matrimonio válido en el país.

Creo también sustancial como garantía la indicación incluida en el proyecto de que el Ministerio Público de Menores es parte necesaria del juicio de adopción. Ello implica subrayar que el interés del menor es el prevalente.

En este orden de ideas sería sustancial que en todo el país avance la creación de juzgados con competencia específica en materia de familia que darán mayor seguridad al conjunto de problemas que plantea la adopción. El proyecto asume expresamente la importancia de la intervención judicial en todos los aspectos, en diversas previsiones.

En primer lugar dispone, en principio, que el juez debe citar a los progenitores del menor y tomar conocimiento personal del adoptado y de los adoptantes, requiriendo la opinión de equipos técnicos, lo que ratifica la existencia de tres sujetos interesados en el proceso de adopción. Asimismo prohíbe la entrega en guarda de menores mediante escritura pública o acto administrativo.

Esto a la vez evita posibles maniobras inescrupulosas que pueden contar con la eventual participación de funcionarios o profesionales. Reitero que uno de los aciertos sustanciales del proyecto consiste en radicar los procedimientos exclusivamente en sede judicial y descartar las actuaciones administrativas.

Existen dos disposiciones interrelacionadas que valoro expresamente. El artículo 12 inciso h) dispone que "deberá constar en la sentencia que el adoptante se ha comprometido a hacer conocer al adoptado su realidad biológica". Se trata de un compromiso jurídico y moral cuya sanción deberá desarrollar en su oportunidad la jurisprudencia.

Pero tiene un profundo contenido ético que luego ratifica el artículo 19: "El adoptado tendrá el derecho a conocer su realidad biológica y podrá acceder al expediente de adopción a partir de los dieciséis años de edad". Estas dos disposiciones reglamentan el derecho a conocer su identidad que garantiza el artículo 8º de la Convención de los Derechos del Niño incorporada a la Constitución.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, aun antes de esta incorporación, había expresado que "entre los derechos no enumerados debe —sin duda— incluirse el derecho de toda persona a conocer su identidad de origen, poder conocer su propia génesis, su procedencia, es aspiración natural del ser humano, que incluyendo lo biológico lo trasciende". Y agregaba: "Tender a encontrar las raíces que den razón del presente a la luz de un pasado que permita reencontrar una historia única e irrepetible es un movimiento esencial, de dinámica

particularmente intensa en las etapas de la vida en las cuales la personalidad se consolida y estructura" (CS., noviembre 13-1990).

En este mismo sentido merece todo nuestro apoyo la inclusión como causa de nulidad de la adopción el hecho de que aquella hubiese tenido un hecho ilícito como antecedente necesario, que se hace cargo de la realidad desgarrante de los hijos de desaparecidos. El proyecto da flexibilidad al principio al dejar al arbitrio judicial valorar dónde reside el interés superior del menor.

Para finalizar señor presidente, el concepto de familia es uno, inequívoco e inalterable en nuestra comunidad, pero existen instituciones, como la relación paterno filial, que por múltiples razones experimentan mutaciones a través del tiempo.

Este proyecto representa una necesaria actualización de la ley que viene a sustituir y considero que cumple con el objetivo primordial de dar hijos a quienes no los tienen y dar los mejores padres posibles a quienes sufren su falta.